

## Reflexiones sobre los (difíciles) retos de las organizaciones indígenas andinas ante los gobiernos de izquierda o “progresistas”

Edgardo Lander

El movimiento y las organizaciones indígenas del mundo andino están confrontando en estos años retos históricamente inéditos. Después de cinco siglos de hegemonía de un orden colonial racista (en sus dos fases de colonialismo español y orden colonial republicano), se han iniciado/acelerado en esta última década procesos de cambio que apuntan en una dirección decolonial. Esto ha sido el resultado de vigorosos procesos político-organizativos indígenas, así como de las alianzas y convergencias con un amplio espectro de movimientos y organizaciones populares en todo el continente: confrontación a gobiernos neoliberales, la lucha contra el ALCA, los Foros Sociales Mundiales y de las Américas, luchas del movimiento campesino...

La expresión más visible y rica de estos desplazamientos lo constituyen las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia en las cuales, cuestionando 500 años de monocultura occidental, se establecen las bases para la decolonización de esos Estados y la construcción de Estados Interculturales y Plurinacionales. Las nociones del *Suma Kawsay* y *Sumak Qamaña* que atraviesan estos textos constitucionales expresan la novedad y potencial radicalidad de estas transformaciones.

Sin embargo, un texto constitucional no transforma a la sociedad. Una constitución es, tanto expresión de una correlación de fuerzas en una coyuntura determinada, como una plataforma o programa de lucha, una utopía o deber ser que se propone la sociedad. Puede ser un poderoso instrumento para conquistar en forma efectiva las transformaciones y derechos que establecen jurídicamente. Estos nuevos textos constitucionales generan un nuevo terreno para las confrontaciones políticas y culturales más favorables para los procesos decoloniales. Son en este sentido un momento muy significativo de estas luchas pero, de modo alguno, su punto de llegada.

La experiencia de los movimientos indígenas con estos gobiernos de cambio ha sido compleja, ambigua, contradictoria. Ha quedado claro que mucho más fácil era la transformación (aun muy radical) de los textos constitucionales, que la ejecución de políticas públicas coherentes, consistentes con lo establecido en dichos textos.

Son muchas las razones para esto. Se trata, de sociedades muy heterogéneas, en las cuales una significativa proporción de la población blanca y mestiza no sólo no comparte la

idea del Estado Plurinacional, sino que muchos lo ven como una severa amenaza a sus privilegios. Esto ha conducido a confrontaciones y proyectos desestabilizadores que ha puesto en severos riesgos la continuidad de estos gobiernos (la derecha en la Media Luna boliviana, el golpe de estado en Ecuador en octubre del 2010, etc.). A pesar de los cambios constitucionales, la estructura y lógica de funcionamiento de estos Estados preserva una fuerte carga inercial, una extraordinaria continuidad. Las expectativas de sectores amplios de la población con relación a un Estado popular y democrático siguen siendo, en muchos sentidos, las mismas. Se espera que el Estado responda a una deuda social acumulada por siglos, y que de cuenta de las demandas de los sectores históricamente excluidos en términos de alimentación, educación, acceso a servicios de salud, seguridad social. Estas políticas públicas no pueden realizarse sin un creciente ingreso fiscal que, en estos países, tiene como fuente principal a las actividades extractivas.

Las tensiones y confrontaciones de estos procesos de cambio en el continente se conforman en diferentes ejes. Un primer eje define los conflictos que se dan entre los sectores privilegiados nacionales e intereses transnacionales, por un lado, y los procesos populares democráticos, por el otro. Estos conflictos se plantean a propósito de asuntos tan claves como el control nacional de los bienes comunes que estaban en manos de transnacionales, o las pugnas por la distribución de la tierra y a propósito de la búsqueda de mayores niveles de equidad. Estas confrontaciones pueden ser entendidas en términos de las clásicas oposiciones entre izquierda (nacional, popular) y derecha (sea nacional o imperial).

Sin embargo, estas confrontaciones no dan cuenta sino de parte de las tensiones/contradicciones básicas presentes en estos procesos de cambio. Operan igualmente fuertes tensiones entre diferentes lógicas de cambio de la sociedad que en momentos pueden ser complementarias, pero que en otros, adquieren el carácter de contradictorias. Estas son las tensiones entre, por un lado, las luchas populares históricas por la inclusión, la redistribución, la igualdad, por los derechos sociales, políticos y económicos, por el empleo, por la participación, y por el otro, las lógicas que le dan prioridad a la decolonización del Estado liberal monocultural camino a la construcción de un nuevo Estado Plurinacional y los patrones culturales del *buen vivir*. En la *lógica popular-democrática redistributiva* está presente una visión de clase: confrontación entre ricos y pobres. Tiene prioridad la redistribución de la riqueza. Para ello es fundamental el gasto social (educación, salud, empleo, seguridad social), la lucha contra la pobreza, los subsidios a las familias más necesitadas. Esto exige un Estado fuerte (¿tecnocrático?), que haga presencia todo el territorio nacional y actúen a favor de los sectores populares en la “modernización” de la sociedad. Es principalmente a partir de estos asuntos que se legitima

el imaginario del socialismo (o *Socialismo del Siglo XXI*).

En la *lógica de la decolonización* tienen prioridad la plurinacionalidad, los derechos a las diferencias, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios, el pluralismo jurídico, el rechazo al desarrollismo, al extractivismo, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra. La lucha por la decolonización apunta hacia una profunda transformación civilizatoria que cuestiona no sólo al capitalismo sino a los patrones productivos y de conocimiento de la cultura occidental dominante, todo lo que queda sintetizado en la noción del *buen vivir*.

De la forma como logren (o no) articularse y retro-alimentarse estas lógicas de transformación social dependerá el futuro de estos procesos de cambio. La tradición de lucha y los proyectos políticos que están asociados a la idea del socialismo no son fácilmente compatibles con los proyectos históricos de la decolonización: corresponden a historias, sujetos sociopolíticos e imaginarios diferentes. El que puedan llegar a ser partes complementarias de un mismo proceso de cambio pasa necesariamente por complejas negociaciones, por difíciles procesos de intercambio y de aprendizaje recíproco. Si estos dos tipos de lógica son construidos políticamente como contradictorias, el resultado no puede conducir sino a la derrota de ambos proyectos de cambio, y la consolidación/fortalecimiento de las formas históricas de la dominación capitalista.

Los gobiernos de Ecuador y Bolivia se encuentran enfrentados a las transnacionales, a las amenazas imperiales, a la acción desestabilizadora de los grupos sociales privilegiados de esas sociedades. Los medios de comunicación corporativos continúan reproduciendo/profundizando la cultura colonial que ha sido históricamente dominante. Esto define lo fundamental de la confrontación entre estos gobiernos por un lado, y los partidos de oposición y los empresarios por el otro. Pero, son igualmente significativas las tensiones entre las dos lógicas o proyectos de cambio señaladas arriba: la *lógica popular-democrática redistributiva* y la *lógica decolonial*. Estas tensiones se dan tanto al interior del propio Estado, del pensamiento y la acción de los dirigentes políticos de los procesos de cambio, como en las demandas y exigencias que le formulan al gobierno los más diversos sectores populares. Los conflictos que se enfrentan en estos procesos no son sólo la expresión de tensiones entre los intereses y proyectos políticos de los sectores económicos y sociales dominantes y los de los sectores populares, campesino e indígenas por el otro. Son igualmente tensiones y perspectivas, no necesariamente coincidentes, al interior de distintas expresiones del mundo popular. Los sujetos sociales y político-organizativos de estas lógicas de transformación de la sociedad son a veces los mismos. A veces se trata de sujetos diferenciados cuyas demandas en la coyuntura pueden enfrentarse.

Uno de los ámbitos en los cuales estas tensiones se han hecho más evidentes desde

la entrada en vigencia de estos nuevos textos constitucionales ha sido el del extractivismo y las modalidades de la inserción primario-exportadora de estos países en la economía global. Los gobiernos argumentan que, a corto y mediano plazo, no existen opciones a la explotación de los hidrocarburos, a la minería a cielo abierto en gran escala, a los monocultivos, que constituyen las principales fuentes del ingreso fiscal. Justifican la continuación o intensificación de esta lógica productiva extractivista en base a la necesidad urgente de responder a las demandas de los sectores populares que son, tanto una exigencia de justicia social o de pago de una deuda social acumulada, como una condición para garantizar una legitimidad y apoyo de la mayoría de la población, sin la cual no sería posible la continuidad de los procesos de cambio.

En estos años no han sido pocos los motivos de desacuerdo entre las organizaciones indígenas y los gobiernos de izquierda, algunos de éstos referidos a asuntos medulares para los pueblos indígenas. Las contradicciones entre la continuidad de las lógicas *modernizantes*, *desarrollistas* y *extractivistas* y la opción civilizatoria del *buen vivir* han sido especialmente intensas.

La política del gobierno venezolano hacia los pueblos indígenas ilustra con claridad estas tensiones. El eje principal de ésta ha sido el impulso de los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas, lo que pasa por el desconocimiento de los liderazgos tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas. En los hechos, esta política está orientada más hacia la incorporación de los pueblos indígenas, a la homogeneización cultural, a la creación de ciudadanos venezolanos igual que los demás, que al reconocimiento del derecho a la diferencia y el carácter *multiétnico* y *pluricultural* del Estado, tal como esto está establecido en la Constitución del año 1999. A pesar de que en las disposiciones transitorias de esta Constitución se afirma expresamente que la demarcación de los territorios (denominados como “hábitats”) de los pueblos indígenas debía hacerse en un lapso máximo de dos años a partir de su aprobación, a once años de vigencia de la Constitución es poco lo que se ha avanzado. Las escasas delimitaciones hechas lo han sido para comunidades, no *territorios* para los *pueblos* indígenas. Sin la demarcación territorial continúa la ocupación/invasión de los territorios de estos pueblos y los tribunales desconocen la existencia de la jurisdicción indígena con el argumento de que no existen territorios reconocidos por el Estado donde ésta pueda ejercerse. Al conceptualizarse a los pueblos indígenas fundamentalmente como venezolanos pobres, requeridos del asistencialismo estatal, se repiten una vez más las políticas del indigenismo integracionista que han tenido efectos destructores de las culturas indígenas tan severos en la historia de este continente, más allá de las buenas intenciones de los funcionarios públicos.

Las contradicciones entre las normas constitucionales e importantes políticas públicas

han sido particularmente controversiales en Ecuador. La *Ley de Aguas* y *Ley de Minería* han sido denunciadas por organizaciones indígenas y ambientalistas como violatorias los *derechos de la naturaleza*, y de los derechos de los *pueblos indígenas* que fueron establecidos en la Constitución. Resulta igualmente polémico, en un Estado *intercultural, plurinacional y laico*, que mediante el *Decreto #1780*, el Presidente Correa le “encomendara” a las misiones católicas una amplia gama de funciones educativas, de salud, productivas, en diversas regiones del país, incluyendo territorios indígenas. Estas actividades serán, de acuerdo al decreto, financiadas por el Estado. Tampoco ayudan a las relaciones entre las organizaciones indígenas y el gobierno las descalificaciones e insultos con los cuales el Presidente Correa se ha referido en forma reiterada a las organizaciones indígenas y a su dirigencia, así como las organizaciones ecológicas que denuncian lo que consideran como violaciones de las conquistas de la Constitución.<sup>1</sup>

A pesar de que en términos globales las organizaciones indígenas tienen un peso mucho más significativo en Bolivia (no sólo en la sociedad, sino al interior del gobierno), que en los otros dos países a los que se ha hecho referencia, en este país se han presentado igualmente fuertes conflictos en torno al extractivismo: tensiones entre la lógica del *suma qamaña* y el desarrollismo. El gobierno de Evo Morales se ha colocado a la cabeza de la lucha global contra el cambio climático, elaborando y articulando sus posturas en forma conjunta con los movimientos y organizaciones que en todo el mundo luchan por la *justicia ambiental* y en contra de la lógica depredadora que avanza aceleradamente en la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. La *Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra* realizada en Cochabamba (abril 2010) ha logrado colocar las demandas de comunidades y pueblos en el centro de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La conferencia ha contribuido muy significativamente a deslegitimar las soluciones de mercado

---

1. Un ejemplo de las reiteradas afirmaciones de este tipo la constituye esta declaración dada por Correa a un diario español: “Lo más peligroso para nuestro proceso no es la derecha, que ya está derrotada. Es el izquierdismo infantil del todo o nada. Es el ecologismo infantil que considera al ser humano como un estorbo en la naturaleza y cree que hay que renunciar al petróleo y a las minas para que vivan bien los animales y las plantas y nos muramos de hambre el resto. Y es el indigenismo infantil, el confundir prioridades. No nos engañemos: el problema de los indígenas es la pobreza, aunque algunos creen que respetar su cultura significa mantenerlos en un estado primitivo.” Correa: 'No creemos en el libre comercio, es un simplismo que puede destruir a un país' *El Mundo. es*, Madrid, 20 de mayo, 2010. [<http://www.elmundo.es/america/2010/05/19/noticias/1274304478.html>]

(mercado de carbono y otras) y las respuestas tecnológicas que las corporaciones transnacionales y los gobiernos del Norte geopolítico han venido imponiendo como falsas soluciones a la crisis ambiental planetaria con el fin de obviar sus responsabilidades históricas y presentes por la sistemática destrucción del planeta. Buscan en estas negociaciones nuevos ámbitos para sus negocios. Se trata de asuntos urgentes para Bolivia ya que los impactos del calentamiento global en el derretimiento de los glaciares, que constituyen la principal fuente de agua de una elevada proporción de la población, no constituye un asunto teórico sino uno de impacto inmediato y vital.

Sin embargo persisten los conflictos, principalmente en torno a la gran minería, a la explotación de hidrocarburos (en especial a propósito de las nuevas concesiones de exploración y explotación en la Amazonia) y megaproyectos de carreteras y represas asociados al modelo del IIRSA.

No es lo que esperaban los pueblos indígenas de estos gobiernos y son por ello justificados los extendidos malestares. Sin embargo, desde el punto de vista de la continuidad y futuro de las luchas de los pueblos indígenas lo peor que podría pasar sería que se desconociera la extraordinaria oportunidad histórica que se ha abierto con estos procesos de cambio. Las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas, la agenda de sus movimientos, no está de modo alguno garantizada ni por las constituciones, ni por la política de estos gobiernos. Ello depende de la correlación de fuerzas en el conjunto de la sociedad, de las alianzas que las organizaciones indígenas puedan conservar y/o construir con otros sectores del movimiento popular. Depende de la capacidad de preservar la autonomía, la propia organización, la propia agenda. Pero depende igualmente de la capacidad para reconocer lo que estos gobiernos representan (o pueden llegar a representar), las posibilidades y fisuras que se abren con estos proyectos políticos. Pasa por reconocer los peligros que para las luchas de los pueblos indígenas y para el conjunto de los sectores populares significaría el regreso de la derecha al gobierno.

En la búsqueda de sus intereses estratégicos el movimiento indígena tiene la responsabilidad de ubicarse históricamente y reconocer que, a pesar de las contradicciones de estos gobiernos y del hecho de que muchas de sus políticas sean juzgadas muy negativamente por las organizaciones indígenas, estos gobiernos no representan lo mismo que los últimos 200 años de gobiernos republicanos.

La dirigencia del movimiento indígena ecuatoriano cometió (y posteriormente reconoció) un severo error político al comprometerse con el gobierno autoritario/neoliberal de Lucio Gutiérrez. Esto generó desconfianza y malestar en las bases del movimiento, produjo un deterioro de la coherencia de las organizaciones indígenas, y condujo a una pérdida de la importante legitimidad que venía logrando el movimiento en el conjunto de la

sociedad ecuatoriana, especialmente a partir del *Levantamiento Indígena* del año 1990. El movimiento indígena ecuatoriano y sus organizaciones todavía no se han recuperado plenamente. Se aprendió con esto una importante lección: la necesidad de preservación de la autonomía de las organizaciones indígenas con relación al gobierno. Sin embargo no puede conducir a una relación de frontal oposición a cualquier gobierno con el propósito de impedir, a como de lugar, que se vuelva a repetir la traumática experiencia y el severo costo político de la asociación del movimiento con Gutiérrez.

Es fundamental que las organizaciones indígenas abran un debate más amplio sobre este nuevo y complejo contexto geopolítico global, regional y nacional, y sobre la mejor forma de avanzar en la construcción de la agenda histórica de sus pueblos.

Nos encontramos en una coyuntura histórica extraordinaria y difícilmente repetible en el continente. Los gobiernos llamados progresistas o de izquierda fueron electos como resultado de procesos de lucha y movilización popular muy amplia en la cual jugaron un papel fundamental las organizaciones indígenas. A pesar de las continuidades existentes en algunos ámbitos de las políticas públicas (es especial en el extractivismo primario exportador), no son gobiernos de derecha, ni gobiernos plenamente desarrollistas. No son gobiernos monolíticos. Por su propio origen y composición, son gobiernos atravesados por tensiones, por contradicciones, por diversas tendencias. Las organizaciones indígenas tienen como reto el reconocer estas tendencias e intentar incidir en ellas, buscando aliados para fortalecer las corrientes transformadoras y frenar las que impulsan el desarrollismo monocultural. La confrontación total con estos gobiernos, como si fuesen más de lo mismo, no puede sino contribuir a reducir su capacidad para incidir sobre sus políticas.

Los obstáculos que se enfrentan hoy en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y por otras modalidades de relación de los humanos con la Madre Tierra no residen sólo en los gobiernos y en las políticas públicas. La cultura de estas sociedades es profundamente heterogénea. A pesar de los resultados de los referéndums aprobatorios de las nuevas constituciones, la noción del *buen vivir* (con todas sus implicaciones como patrón civilizatorio), no constituye hoy el sentido común compartido por la mayor parte de los habitantes de estos países. Cinco siglos de colonialismo han dejado profundas huellas. Los medios corporativos de comunicación siguen jugando un papel medular en la reproducción del *individualismo posesivo* que identifica el *vivir bien* con los patrones estadounidenses de consumo material. Poblaciones excluidas, con acceso limitado a las condiciones de una vida digna le exigen a estos gobiernos políticas de empleo, de salud, educación, seguridad social. No son tampoco nítidas ni simples las contradicciones entre las aspiraciones de los pueblos indígenas y las políticas de estos gobiernos. Estas contradicciones y tensiones se reproducen al interior de los propios pueblos y comunidades indígenas, que son a su vez,

heterogéneos, que han sido profundamente impactados por la historia colonial. Las políticas sociales de estos gobiernos le están llegando a las bases de las organizaciones indígenas. Si la dirección de las organizaciones indígenas no reconoce estas tensiones en su propio seno (las demandas sociales inmediatas que hoy formulan muchas comunidades indígenas), se abre la brecha para que las políticas asistencialistas de los gobiernos socaven a estas organizaciones desde sus propias bases.

Ante lo que aparece como crisis terminal del modelo civilizatorio depredador del capitalismo, está en juego la construcción de *una nueva hegemonía cultural* para el conjunto de la sociedad, una *otra* organización democrática de la vida colectiva que sea pluricultural y capaz de vivir en armonía con la Madre Tierra. No basta con una nueva constitución o un cambio de gobierno. Esto constituye un complejo proceso de transformación cultural, no puede, de modo alguno, ser reducido a la acción de las políticas públicas, ni puede esperarse que ocurra en términos inmediatos.

Si estos gobiernos son derrotados, no hay perspectivas, ni a corto ni a mediano plazo, de que éstos sean sustituidos por gobiernos más capaces de impulsar la agenda de las organizaciones y pueblos indígenas. Por el contrario, la derrota de estos gobiernos, cuya estabilidad y/o continuidad ha estado en estos años severamente amenazada, conduciría al retorno de la derecha racista que le daría prioridad a los intereses empresariales sobre los intereses populares. Las fundamentales conquistas de estos años serían rápidamente revertidas. Las alianzas o acuerdos tácitos o explícitos de algunas direcciones indígenas con sectores de la derecha, la celebración del golpe de Estado en contra Correa por dirigentes indígenas, y el tono ambiguo de las posturas oficiales de las organizaciones con relación al golpe de Estado, son expresión de un inmediatismo irresponsable. Se colocó alguna posible ventajas política inmediata sobre la visión de futuro. Las pugnas internas por el liderazgo de las organizaciones no pueden colocarse sobre los retos estratégicos que hoy confrontan las organizaciones indígenas.

Las urgencias que plantea la actual crisis civilizatoria, los acelerados procesos depredadores de destrucción del planeta, no permiten posponer hacia un futuro, ni siquiera de mediano plazo, la tarea de detener la maquinaria destructora del capitalismo depredador. Para ello es indispensable contar con todas las alianzas posibles. Son indispensables políticas que, a pesar de los inevitables obstáculos que se enfrentan y seguirán enfrentando, le den prioridad a los objetivos fundamentales sobre los conflictos coyunturales. Es necesario superar los maniqueísmos abstractos (por ejemplo: *extractivismo* vs. *Derechos de la Madre Tierra* planteados en términos absolutos). Tenemos que responder colectivamente, en forma dialogada, negociada democráticamente, necesariamente conflictiva pero con reconocimiento y respeto recíproco, a los complejos retos prácticos de dar pasos *hoy* en la



transición desde el extractivismo a una sociedad del *buen vivir*.

Tenemos mucha más claridad en lo que rechazamos que en las características de la sociedad con la cual buscamos remplazar a este patrón civilizatorio en crisis. Esto exige extraordinarios esfuerzos de lucha, de diálogo, de acuerdos, de alianzas. Demanda búsquedas compartidas con otros, la recuperación de experiencias, de construcción colectiva, así como el reconocimiento de las potencialidades abiertas por la actual coyuntura histórica. Exige igualmente la modestia de tener capacidad de reconocer que no contamos con todas las respuestas. Los retos que hoy confrontamos son históricamente inéditos.

Caracas, noviembre 2010